

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 11 MAR 2020

Auto Interlocutorio No. 96

MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

ACCIÓN:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-012-2017-00248-01
DEMANDANTE:	BLANCA LIGIA GIRÓN HOYOS
DEMANDADO:	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – CONFIRMA AUTO QUE NIEGA PRUEBAS

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, contra auto interlocutorio nro. 662 dictado en audiencia inicial del 09 de agosto de 2019¹ proferido por el Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali, que negó por innecesarias la práctica de las pruebas documentales solicitada por la parte demandante.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, la señora Blanca Ligia Girón Hoyos, demandó al Departamento del Valle del Cauca y solicitó² la nulidad de la Resolución Nro. 0160 del 13 de febrero de 2017, que corrigió la Resolución Nro. 8705 de octubre 28 de 2015; se declare la sanción moratoria originalmente reconocida previo el descuento pagado y a título de restablecimiento del derecho reclamó el pago de lo adeudado con la correspondiente indexación.

III. LA PROVIDENCIA APELADA.

En el transcurso de la audiencia inicial celebrada el día 09 de agosto de 2019³ el Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali mediante auto interlocutorio nro. 662⁴ negó por innecesarias las pruebas documentales solicitadas por la parte demandante, toda vez que con la documentación arrimada al plenario antecedentes Administrativos, puede emitirse un pronunciamiento de fondo en relación a la controversia litigiosa planteada.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Inconforme con la decisión anterior, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación manifestando (transcripción literal):

“(...) solicito recurso de apelación para que este sea interpuesto, ya que es muy importante para determinar que es un nuevo poder que se está solicitando y no el poder que le fue otorgado al doctor Víctor Daniel Castaño en la resolución 8705, ese

¹ Ver folio 13-15
² Ver folio 1
³ Ver folio 13-15
⁴ Ver folio 14



poder culmina hasta que se le reconoce la resolución y el departamento está solicitando que para poder modificar o cambiar alguna resolución o la 8705 la ley establece que es necesario que el acreedor, en este caso el cliente, le haya otorgado un nuevo poder, para que el abogado pueda pedir la revocatoria de la resolución 8705, entonces por eso es importante esa prueba, para determinar y esclarecer si es o no cierto.

El fin de esa prueba su señoría, es de establecer que no existe un documento, o que el Departamento determine, que existe un nuevo poder para que el apoderado Víctor Daniel Castaño, pueda haber solicitado la revocatoria, existe una solicitud presentada por él, un año después, obviamente ya han transcurrido más de 4 meses que tiene el Departamento para demandar sus propios actos administrativos, igualmente lo que tiene que ver si un apoderado presenta una solicitud al Departamento, el Departamento debe estudiar si cumple o no cumple los requisitos conforme al proceso, si está establecido en la norma, ese es el fin. Determinar, no como el Departamento en varias oportunidades ha querido demostrar que con la petición que aparece presentada por el doctor Víctor Daniel Castaño, hace referencia a que ese es el poder (...)»⁵.

V. CONSIDERACIONES:

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el auto mediante el cual se niega el decreto o la práctica de una prueba es pasible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. La norma en comento señala:

“Art. 243.- Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

(...)»

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.”

5.2. DEL DECRETO DE PRUEBAS

Conforme lo establecido en el artículo 180⁶ de la Ley 1437 de 2011, en la audiencia inicial el Juez decretará las pruebas pedidas por las partes y terceros, siempre que sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales existe inconformidad.

El artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, establece que en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en materia probatoria, en lo que no esté expresamente regulado se aplicarán las normas del Estatuto Procesal Civil, hoy Código General del Proceso.

Por su parte, la Ley 1564 de 2012 en su artículo 168 establece que *“El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”*, así las cosas, de la norma en cita se colige que, para determinar el decreto de las pruebas solicitadas por las

⁵ Ver video – folio 14

⁶ **Artículo 180. Audiencia inicial.** Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

(...)»

10. Decreto de pruebas. Solo se decretarán las pruebas pedidas por las partes y los terceros, siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales exista disconformidad, en tanto no esté prohibida su demostración por confesión o las de oficio que el Juez o Magistrado Ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad.



partes, se debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad.

5.3. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer, si las pruebas solicitadas por el apelante atienden los requisitos emanados en la ley 1564 de 2012, respecto de la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, para que el a-quo las decrete o si en caso contrario, el juez puede continuar con la actuación procesal aduciendo que las mismas, se tornan innecesarias en el trámite procesal.

5.4. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 320⁷ del C.G.P, aplicable por remisión del artículo 306⁸ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solo sobre los reparos.

El apelante considera necesario que el Despacho solicite a al Departamento del Valle del Cauca, que certifique si se otorgó un nuevo poder por el actor, para revocar o modificar la resolución por la que le reconocieron unos derechos.

El A-quo consideró que las pruebas documentales solicitadas por la parte demandante no eran necesarias porque con los antecedentes administrativos aportados por la parte demandada ya puede emitir un pronunciamiento de fondo en relación a la controversia litigiosa planteada⁹.

Sobre el decreto de las pruebas, el Consejo de Estado ha dicho:

“Las disposiciones del Código General del Proceso, en relación con el régimen probatorio, indican que las pruebas deben referirse al asunto materia del proceso y que “el juez rechazará mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.”¹⁰

Lo anterior significa que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si estas cumplen los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con el litigio. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no esté suficientemente acreditado con otra.”¹¹

⁷ ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

(...)

⁸ ARTÍCULO 320. Fines de la apelación.

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia:(...)

⁹ Ver folio 14

¹⁰ Artículo 168. Rechazo de plano.

El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

¹¹ Auto del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, 20 de mayo de 2015. Radicación No. 76001-23-33-000-2012-00691-01.

Frente al tema probatorio, el Consejo de Estado¹² en reciente jurisprudencia recordó:

“(....)”

23. *Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado¹³, se considera que para verificar:
i) la **pertinencia** de una prueba se debe revisar que guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; (...)*”

Acerca del decreto de las pruebas, el mismo Consejo de Estado¹⁴ ha dicho:

“Las disposiciones del Código General del Proceso, en relación con el régimen probatorio, indican que las pruebas deben referirse al asunto materia del proceso y que “el juez rechazará mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.”¹⁵

*Lo anterior significa que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si estas cumplen los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. **La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con el litigio.** La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no esté suficientemente acreditado con otra.” (Negrillas del Tribunal)*

La doctrina¹⁶ respecto a la utilidad de la prueba ha establecido:

“Se entiende por utilidad de la prueba el aporte que pueda llevar al proceso para cumplir con el fin de crear la certeza acerca de los hechos en el ánimo del funcionario judicial, en otros términos, el poder enriquecedor del convencimiento del juez que determinada prueba conlleva.

En este evento se parte del presupuesto de que la prueba es conducente y pertinente, pero no obstante lo anterior, deja de ser útil por entrar al campo de lo que el art. 168 del CGP denomina como manifiesta superfluidad, por no ser ya necesaria para formar el convencimiento del juez, quien igualmente puede rechazar de plano su práctica, pues no va a ser enriquecedora del debate”

Así mismo ha determinado¹⁷:

“En desarrollo del principio de economía, una prueba será inútil cuando el hecho que se quiere probar con ella se encuentra plenamente demostrado en el proceso, de modo que se torna en innecesaria y aún costosa para el debate procesal.

Para que una prueba pueda ser considerada inútil primero se debe haber establecido su conducencia y pertinencia, que son presupuestos de utilidad.

En virtud de este principio, serán inútiles las pruebas que tiendan a demostrar hechos notorios, hechos debatidos en otro proceso o hechos legalmente presumidos.

Teniendo en cuenta los anteriores lineamientos, en el caso concreto se observa que se negaron las pruebas documentales solicitados por considerarlas innecesarias, pues el

¹² Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, providencia del 22 de mayo de 2019, Radicación número: 05001-23-33-000-2018-02345-01(PI).

¹³ Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia de 7 de febrero de 2013, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, número único de radicación 25000232700020100016201; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 1.º de marzo de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 25000232400020029000303.

¹⁴ Auto del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, 20 de mayo de 2015. Radicación No. 76001-23-33-000-2012-00691-01.

¹⁵ **Artículo 168. Rechazo de plano.**

El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

¹⁶ LÓPEZ BLANCO, HERNÁN FABIO, “CODIGO GENERAL DEL PROCESO PRUEBAS”, pág 112, DUPRE Editores, Bogotá 2017.

¹⁷ NISIMBLAST NATTAN, “DERECHO PROBATORIO”, pág 202, Ediciones Doctrina y Ley, 3 Edición 2016.



juez fijó el litigio centrándolo a determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento de una sanción moratoria.

La parte demandante solicitó con la demanda¹⁸ decretar las siguientes pruebas:

"1.- Oficiar a la Secretaria de Educación y/o Hacienda del Departamento del Valle del Cauca, a fin que certifique si el actor otorgó nuevo poder después de agotada la actuación administrativa que facultara al apoderado a solicitar la revocatoria, conciliación, modificación o transacción de los derechos reconocidos en la Res. 8705 del 28 de octubre de 2015

2.- Oficiar a la Secretaria de Educación del Departamento del Valle del Cauca, proceda a enviar la liquidación individual efectuada en favor del demandante, tanto la efectuada en la Res 8705 de 2015, como la efectuada en la Res 0160 de 2017.

3.- Oficiar al Departamento del Valle del Cauca, a fin de que certifique con destino a este despacho, si el actor fue convocado dentro del proceso de reestructuración de pasivos para el reconocimiento y pago de la sanción moratoria como efecto de la consignación extemporánea de los excedentes de las cesantías como efecto de nivelación salarial, así como si le fue notificada la correspondiente acreencia en la convocatoria del acuerdo y la forma de pago"

En la sustentación del recurso indicó que es necesaria la prueba solicitada, para determinar que es un nuevo poder que se está solicitando y no el poder que le fue otorgado al doctor Víctor Daniel Castaño en la resolución 8705, y sus argumentos fueron encaminados solamente a dicha negativa.

Teniendo en cuenta lo anterior y revisado el escrito de la demanda, se observa que las pruebas solicitadas por el demandante no guardan relación con los hechos¹⁹ que se pretenden demostrar y con la fijación del litigio que se centró en determinar si el actor tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria, por lo tanto las mismas resultan impertinentes, además, de ser innecesarias pues como lo señaló el A-quo con los antecedentes administrativos se puede emitir un pronunciamiento de fondo.

Así las cosas, este Despacho confirmará la decisión tomada por el A-quo mediante auto interlocutorio nro. 662 del 9 de agosto de 2019.

En consecuencia,

RESUELVE:

PRIMERO. - CONFIRMAR el auto interlocutorio nro. 662, dictado en audiencia inicial del 09 de agosto de 2019, proferido por el Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali, pero por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia.

Notifiquese,


EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS
Magistrado

¹⁸ Ver folio 3 vuelto

¹⁹ Ver folio 1 vuelto